



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN**

Popayán, veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós (2022)

Expediente:	19001 3333004 2020 00101 00
Demandante:	JOSE ORLANDO VALENCIA
Demandado:	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Medio de Control:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Auto No.	844

ORDENA ADECUAR

El señor JOSE ORLANDO VALENCIA PAREJA, por medio de apoderado judicial presenta demanda a través del medio de Control de Nulidad y Restablecimiento, con la pretensión de que se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, contemplados en la resolución número 1992 del 2015, mediante la cual se pretende dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo por Descongestión de Popayán y de la Resolución 2390 de 2015 que resolvió el recurso de reposición, confirmándola.

Señala el demandante que, el Juzgado Primero Administrativo por Descongestión de Popayán, profirió sentencia fechada en septiembre 18 de 2014, la cual dispuso que la entidad demandada debía realizar la reliquidación pensional en cuantía del 75% del promedio de los salarios y todos los factores de salario efectivamente devengados, por el actor durante el último año de servicios prestados, a saber asignación básica, prima de servicios, prima de vacaciones, y bonificación por servicios prestados.

Mediante Resolución No. 1992 de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pretendió dar cumplimiento a la sentencia referida, resolución frente a la cual se interpuso recurso de reposición, el cual se resolvió mediante Resolución 2390 del 19 de noviembre de 2015, confirmándola.

Que el 9 de abril de 2018 el actor radicó una petición solicitando la reliquidación de la pensión de vejez, calculada mediante Resolución 1992 de 2015, incluyendo los factores salariales correspondientes al auxilio de alimentación, de transporte y prima de navidad, efectivamente devengados por el actor en el último año laborado, en respuesta se le indicó que la petición en idéntico sentido ya se había resuelto mediante resolución del Ministerio de Ambiente No. 2390/2015.

Como se puede observar, dentro de la demanda, se pretende el correcto cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo por Descongestión de Popayán, alegando que, mediante el acto administrativo demandado, se realizó indebidamente la liquidación.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN

De conformidad con la providencia del Consejo de Estado del 23 de enero de 2020¹, los actos administrativos de cumplimiento de una providencia judicial no son pasibles de ser controvertidos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo tanto, el mecanismo procesal adecuado para controvertir la respuesta dada por una entidad pública a la petición de cumplimiento de una sentencia judicial de condena emitida en su contra es el trámite de ejecución de sentencia o proceso ejecutivo con título judicial. Al respecto la Alta Corporación señaló:

1. “Los actos de ejecución son aquellos actos administrativos que cumplen lo ordenado en una sentencia judicial u otro acto administrativo, v. gr. la resolución Núm. 2279 de 14 de mayo de 2004 a través de la cual CASUR dice haber cumplido la sentencia judicial de condena proferida a favor del hoy accionante². Por regla general y salvo norma expresa en contrario, frente a este tipo de actuaciones no procede recurso alguno en vía administrativa³ porque no constituyen una decisión diferente a la ejecución de una orden.

2. Las controversias sobre el cumplimiento a una providencia judicial de condena no pueden generar actos administrativos demandables a través de un medio de control ordinario declarativo, como el de nulidad y restablecimiento del derecho, significaría dilatar ad infinitum las controversias jurídicas entre las partes. Esto haría nugatorio el principio de seguridad jurídica y de cosa juzgada material.

3. En virtud de todo lo anterior, la Sala considera en este caso que el mecanismo procesal idóneo para controlar la respuesta dada por la administración ante la petición del ciudadano demandante, es el trámite de ejecución de sentencia o proceso ejecutivo con título judicial. Esto porque la finalidad del actor es lograr el cumplimiento total de una sentencia judicial, y demostrar que este solo se dio en forma parcial, imperfecta, y tardía.

4. En efecto, los artículos 298 y 299 del CPACA regulan que cuando no se ha cumplido voluntariamente una decisión judicial condenatoria procede el trámite de ejecución de condenas por los cauces del proceso ejecutivo regulado en el otrora CPC, hoy Código General del Proceso⁴. La competencia para estos efectos está consagrada en los artículos 152.7, 155.7 y 156.9 del CPACA, en armonía con el artículo 297 y siguientes ib.⁵ El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre esta vía procesal a través de decisiones proferidas por sus diferentes secciones.⁶

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Rad. No. 25000- 23-42-000-2013-04019-01(3927-15). C.P. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 25000-23-41-000-2012-00644-01.

³ Artículo 75 del CPACA. «No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.»

⁴ Igual regulación tenía el Decreto 01 de 1984, luego de la modificación introducida por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 al consagrar en su artículo 87 que «[...] a los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil [...]» y precisar la competencia para tramitar los mismos en sus artículos 132, 134B ib, ordinal 7 de ambos artículos y 134D ejusdem.

⁵ Antes regulada en los artículos 132 y 134B del CCA.

⁶ Al respecto ver: a) Sección Primera, sentencia de 28 de abril de 2016, Radicado Número: 11001-03-15-000- 2015-03359-01(Ac), Actor: Daniel Patiño Moscoso, Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A. b) Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2017, Radicación Número: 11001-03-15-000-2013-01733-01(Ac), Actor: Harold Humberto Agudelo Chaparro, Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro. c) Sección Primera, auto de 8 de febrero de 2018, Radicación Número: 25000-23-24-000-1999-00831-02, Actor: Fiduciaria Cooperativa de Colombia-Fidubancoop en Liquidación y Constructora M.R.M. Ltda., Inversiones Inmobiliarias, Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro. d) Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 27 de febrero 2014, Radicación Número: 11001-03-25-000- 2014-00145-00 (0351-2014). Actor: Armando Rueda Mosquera, Demandado: CREMIL. e) Sección Segunda, Subsección B, auto de 18 de mayo de 2017, Radicación Número: 15001-23-33-000-2013-00870-02(0577-17), Actor: Dolly Castañeda y Rubén Darío Mejía Martínez, Demandado: Departamento de Boyacá. f) Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de Diciembre de 2017, Radicación Número: 11001-03-15-000-2017- 02763-00(Ac), Actor: Luis Eduardo



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN

Incluso, la Sección Segunda estudió las formas procesales y el juez competente para hacer efectivas las sentencias condenatorias dictadas por esta jurisdicción, en decisión de importancia jurídica⁷”.

Mediante la referida sentencia, el Consejo de Estado señaló además que, en casos como el presente, aun cuando los actos administrativos acusados no son demandables a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, acorde con las finalidades del artículo 171 de la Ley 1437, inciso primero, se debe adoptar las medidas procesales consagradas en la norma para garantizar la tutela judicial efectiva frente a la controversia planteada en la demanda, por lo cual, se debe adecuar el medio de control invocado si es del caso, o inadmitir la demanda respectiva cuando sea necesario de conformidad con las características del que proceda⁸.

En cuanto a la competencia por factor territorial, el numeral 9° de artículo 156 del C.P.A.C.A., dispone que si se trata de ejecutivos sobre la ejecución de sentencias o conciliaciones, será competente el Juez que la profirió, lo que obedece a la atribución del factor de competencia conexión, establecida en los artículos 306 y 307 del Código General del Proceso – CGP, por remisión de los artículos 298 y 306 del CPACA.

Como la sentencia fue proferida, en el sistema escritural consagrado en el Código Contencioso Administrativo - CCA, pero la demanda ejecutiva es formulada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, en el sistema oral, en consideración a la cuantía es competencia de los Juzgados Administrativos del Circuito de Popayán su conocimiento y trámite por lo que se avocará el conocimiento del mismo.

De acuerdo a lo expuesto, se entiende que el demandante debe dar inicio a un proceso ejecutivo y no un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Así las cosas, deberá el demandante adecuar la demanda a un proceso ejecutivo

Por lo expuesto, el Juzgado **DISPONE:**

1.- ADECÚESE por parte del demandante, la demanda a un proceso ejecutivo, conforme lo ordenado en la parte motiva de esta providencia.

Hernández Carvajal, Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro. g) Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 2008. Radicación Número: 68001-23-15-000-2002-01365-01(31280). h) Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Número de Radicación: 05001-23-31-000-1996-00659-01, Actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros. i) Sección Tercera. Subsección C, auto de 7 de octubre de 2014, Radicación número: 47001-23-33-000-2013-00224-01 (50006) Actor: Rocío de la Hoz Esquea y otros, Demandado: Metroagua S.A. E.S.P. j) Sección Cuarta, sentencia de 6 de septiembre de 2017, Radicación Número: 11001-03-15-000-2017-01491-00(Ac), Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare. k) Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, Radicación Número: 11001- 03-15-000-2018-00445-01(Ac), Actor: Unión Temporal Mavig-Deprocon, Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. l) Sección Quinta, Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 10 de mayo de 2018, Radicación Número: 08001-23-33-000-2018-00244-01(Ac), Actor: Myriam Esther Insignares de Flórez, Demandado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla

⁷ Auto AUJ- CE-SII-002-2016 proferido dentro del radicado 11001-03-25-000-2014-01534 00 (4935-14), el 25 de julio de 2016. Actor: José Arístides Pérez Bautista, Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

⁸ Ver las siguientes providencias ya citadas: Sección Tercera, Subsección C, del 3 de junio de 2015, Radicado 15001-23-33-000-2014-00520-01 (53.825), Demandante: Pedro Arturo Naranjo Tavaco y otros, Sección Tercera, Subsección B, 26-06-2015, Radicación 19001-23-33-000-2014-00154-01(51760), Actor: Sociedad Solarte Molina LTDA, Sección Tercera, Subsección B, del 7 de junio de 2017 radicado 05001-23-33-000-2016- 00395-01(57540). Actor Luz Estrella Serrano Ocampo y Otros.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN**

2.- Para el efecto se concede el término de diez (10) días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente providencia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

La Juez,

CARMEN YANETH ZAMBRANO HINESTROZA

Firmado Por:

Carmen Yaneth Zambrano Hinestroza

Juez Circuito

Juzgado Administrativo

004

Popayan - Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 9f8f261ac5190c294d3de194c0cc01443b7ea2aaaab82074ebe71136d6b334c0

Documento generado en 28/06/2022 11:40:36 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>